

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

26ª REUNION — 3ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA (ESPECIAL) —
17 DE NOVIEMBRE DE 1993

Presidencia del señor diputado Alberto Reinaldo Pierri

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ACENOLAZA, Florencio Gilberto
ACHEM, Antonio
AGUADO, Jorge Rubén
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALENDE, Oscar Eduardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ÁLVAREZ, Héctor Claudio
ÁLVAREZ ECHAGÜE, Raúl Angel
AMADEO, Eduardo Pablo
ANTELO, José María
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDÁRIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Juan Carlos
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BARBERA, Eliseo
BASSANI, Angel Marcelo
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BELTRAN, Carlos Roberto
BERICUA, Jorge
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Oscar Alberto
BORDA, Osvaldo
BORDIN CAROSIO, Hugo Antonio
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BREARD, Noel Eugenio
BROOK, Mario Carlos
BRUZZO, Omar Obdulio
CABRERA, Gerardo
CAPIERO, Juan Pablo
CAIMMI, Fernando Enrique
CALLEJA, Ovidio Amílcar
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMANO, Graciela
CANATA, José Domingo
CARRERAS, Porfirio Mario

CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Aníbal
CAVALLARI, Juan José
CEBALLOS, Walter Alberto
CORCHUELO BLASCO, José M.
CROSTELLI, Juan Carlos
CRUZ, Washington Jesús
D'ALESSANDRO, Miguel H.
D'AMBROSIO, Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
DE MARTINO, Victor Amador
DI TULLIO, Héctor Horacio
DURASONA y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
ECHEVERRÍA, Luis María
ELÍAS, Angel Mario
ESPECHE, Alberto Luis
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.
FAJARDO, Juan Carlos
FALLETTI, Julio César José
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FELLNER, Eduardo Alfredo
FERNÁNDEZ, Roberto Enrique
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo C.
FIGUEROA, Pedro Octavio
FLORES, Rafael Horacio
FOLLONI, Jorge Oscar
FORNERÓN, Lino
FRIGERIO, Octavio Oscar
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARCÍA CUERVA, Ignacio S.
GARCÍA de NOVELLI, María C.
GARCÍA MORENO, Miguel
GARGIULO, Pablo
GAUNA, Juan Octavio
GERMANO, Alberto Raúl
GIMÉNEZ REBORA, José
GIOJA, José Luis
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ, José Ernesto
GÓMEZ, Roque Julio César
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ, Luis Mario
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GASS, Gabriela M.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Antonio Isaac

GUZMÁN, María Cristina
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERNÁNDEZ, Santos Abel
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA, Luis Fernando
HUMADA, Raúl
IBARBIA, José María
IBARRECHE, Julio César
JALIL, Luis Julián
KELLY, Elsa Diana Rosa
KOTH, Carlos
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LÓPEZ de ZAVALÍA, Fernando J.
LOSADA, Luis Enrique
LOUTAF, Julio César
LYNCH, Carlos Alberto
MACHADO, Oscar Alfredo
MACHICOTE, Jorge Raúl
MANNY, José Juan
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCO, Jorge Raúl
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARELLI, Mabel G. de
MARINO, Juliana Isabel
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENEGHINI, Javier Raynaldo
MICHELLI, Marco Aurelio
MOLARDO, Elvio Francisco
MOLINAS, Ricardo Francisco
MOREAU, Leopoldo Raúl Guido
MOURE, Juan Manuel
MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
MUNOZ, Marcelo Bernardo
NACUL, Miguel Camel
NIKISCH, Hugo Víctor
NINO, Jorge
NOVAU, Pedro José
OLIVERA, Enrique José
ORGÁZ, Carlos Alfredo
ORQUIN, Leopoldo Manuel
ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
PARADA, Alberto

PARENTE, Rodolfo Miguel
PEPE, Lorenzo Antonio
PERALTA, Aníbal Pedro
PESCE, Félix
PICCININI, Ana Ida
PIERRI, Alberto Reinaldo
PINTO, Guillermo
PIOTTI, Alberto Daniel
PRAT, Alfredo Ernesto
PROFILI, Gerardo Pedro
PRONE, Alberto Josué
PURICELLI, Arturo Antonio
QUEZADA, Rodolfo Héctor
RAIMUNDI, Carlos Alberto
RIZ, Ricardo Horacio
RODRIGO, Esteban Joaquín
RODRIGUEZ, Raúl Eduardo
RODRIGUEZ SAÑUDO, Hugo B.
ROIG, Angel
ROMERO, Carlos Alberto
ROY, Irma
SAADI, Luis Alberto
SABIO, Juan Carlos
SALVADOR, Daniel Marcelo
SÁNCHEZ GALDEANO, Roque
SANTÍN, Eduardo
SCELZI, Carlos José
SEGUI, Héctor Miguel
SODERO NIEVAS, Víctor Hugo
SORIA, Carlos Ernesto
SORIA ARCH, José María
SPINOSA, Augusto Juan
STORANI, Conrado Hugo
SUCARIA, Nefel
SUEIRO, Carlos Adolfo
SUREDA, Ángela Gerónima
TACTA de ROMERO, Emma A.
TOMA, Miguel Ángel
TOPA, Raúl Roque
TOTO, Francisco Patricio

TROYANO, Silvia Elena
URIONDO, Luis Enrique R.
VALCARCEL, Juan Manuel
VARELA, Néstor Angel
VARELA BARRIO, Juan Carlos
VARELA CID, Eduardo
VÁZQUEZ, Ricardo Héctor
VENESIA, Gualberto Edgardo
VICCHI, Raúl Horacio
VIQUEIRA, Horacio Gustavo
YOMA, Jorge Raúl
ZAMORA, Luis Fernando
ZICARELLI, Orlando

AUSENTES. CON LICENCIA:

CAPUTO, Dante Mario
CICARE, Miguel Ángel
ITURRE, César Eusebio del Valle
MAGGI, Juan Alberto
ZAVALA, Gilberto Antonio

AUSENTES. CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

ARANDA, Saturnino Dantti
BAUM, Daniel

AUSENTES. CON AVISO:

ADAIME, Felipe Teófilo
ALAMI, Ernesto Salim
ÁLVAREZ, Carlos Alberto
ÁLVAREZ GARCA, Normando M.
BARBOTTI, Atílio Ector
BAYLAC, Juan Pablo
BENEDETTI, Jorge Enrique
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BERMÚDEZ, María del Pilar
BISCHOF, Enrique Alberto
BRUNATI, Luis Pedro

CAMAÑO, Dante Alberto
CASARI de ALARCIA, María Leonor
COSSOS PÉREZ, Juan Nicolás
CRÁMARO, Hugo Arnaldo
DUSSOL, Ramón Adolfo
FERNÁNDEZ, Roberto Carlos
FERRADÁS, Miguel Enrique
FERREYRA, Eduardo Mario
FESCINA, Andrés Julián
FONTELA, Molsés Eduardo
GAN, Fernando Pascual
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Pedro Alberto
GATTI, Héctor Angel
GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
GUERRERO, Luis Serafín
HERRERA ARIAS, Manuel H.
IGLESIAS, Evaristo Constantino
LECONTE, Ricardo Guillermo
MANFREDOTTI, Carlos
MARCOLLI, Juan Miguel Angel
MARTÍN de DE NARDO, Marta
MARTÍNEZ, Luis Alberto
MICHITTE, Salomón Antonio
MONTEVERDE, Carlos Roberto
NATALE, Alberto Adolfo
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel A.
PAROLA, José María
PARRILLI, Oscar Isidro José
RODRÍGUEZ, José
ROMERO, Humberto Antonio
RUIZ, Angel Rafael
SAADI, Ramón Eduardo
SACKS, Rubén Rodolfo
SALUSSO, Horacio Ramón
SAMUD, Manuel Julio
VANOSI, Jorge Reinaldo
VÁZQUEZ, Roberto
ZAMBIANCHI, Carlos
ZAMORA, Federico
ZARACHO, Evelio Argentine

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª reunión (Sesión preparatoria), de fecha 28 de abril de 1993.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 3307.)
2. Convocatoria a sesión especial. Lectura de la resolución relacionada con la convocatoria y pronunciamiento de la Honorable Cámara respecto del asunto a considerar. (Pág. 3307.)
3. Consideración del asunto mencionado en la convocatoria: dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de ley en revisión sobre modificación del Código Penal en materia de abandono de personas, supresión y suposición del estado civil y de la identidad, y sustracción de menores (51-S.-93). (Página 3308.)
4. Mociones de orden formuladas por el señor diputado Matzkin de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer la inclusión en el temario de la sesión especial del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión por el que se declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional (106-S.-93), y de que el asunto vuelva a comisión. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 3315.)

5. Mociones de orden formuladas por el señor diputado Durañona y Vedia de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer la inclusión en el temario de la sesión especial del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley del que es coautor sobre procedimientos para la promoción de la reforma de la Constitución Nacional (3338-D.-93), y de que el asunto vuelva a comisión. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 3316.)
6. Moción de orden formulada por el señor diputado Rodríguez Sañudo de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer el tratamiento del asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3316.)
7. Moción del señor diputado Rodríguez Sañudo de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3317.)
8. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 3 de este sumario. Se sanciona. (Pág. 3317.)
9. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyec-

to de ley en revisión por el que se crea la Defensoría del Pueblo en jurisdicción del Poder Legislativo de la Nación (63-S-93). (Pág. 3317.)

10. **Indicación del señor diputado Hernández (A.M.) de que la Honorable Cámara autorice la inserción de los discursos de los señores diputados sobre el asunto al que se refieren los números 3 y 8 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3325.)**

11. **Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 3326.)**

12. **Moción de orden formulada por el señor diputado Ortiz Maldonado de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer el tratamiento del asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3327.)**

13. **Moción del señor diputado Ortiz Maldonado de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. Se aprueba. (Página 3327.)**

14. **Consideración del proyecto de declaración del señor diputado Ortiz Maldonado y otros por el que se expresa repudio a las declaraciones efectuadas por el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla (3.670-D-93). Se sanciona. (Pág. 3327.)**

15. **Moción de orden formulada por el señor diputado Baglini de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer el tratamiento del asunto al que se refiere el número 17 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3328.)**

16. **Moción del señor diputado Baglini de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 17 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3329.)**

17. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley del señor diputado Baglini y otros por el que se constituye la Comisión Administradora de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (3.673-D-93). Se sanciona. (Pág. 3329.)**

18. **Apéndice:**

- A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 3330.)
- B. Asuntos entrados:

I. Dictamen de comisión. (Pág. 3336.)

II. Proyecto de ley. (Pág. 3336.)

III. Proyecto de declaración. (Pág. 3336.)

C. Inserciones solicitadas por los señores diputados:

1. Sánchez Galdeano. (Pág. 3336.)

2. Brook. (Pág. 3340.)

3. Meneghini. (Pág. 3341.)

4. Parente. (Pág. 3343.)

5. Rodríguez Sañudo. (Pág. 3344.)

--En Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de noviembre de 1993, a la hora 15 y 26.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pierri). — Con la presencia de 136 señores diputados queda abierta la sesión especial.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de La Rioja, don Jorge Raúl Yoma, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

--Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado don Jorge Raúl Yoma procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL

Sr. Presidente (Pierri). — Por Secretaría se dará lectura del pedido de sesión especial formulado por varios señores diputados en número reglamentario.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Dice así:

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1993.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri,

Tenemos el agrado de dirigimos al señor presidente a fin de solicitarle disponga la convocatoria a sesión especial para el día miércoles 17 de noviembre próximo con el objeto de tratar el Orden del Día Nº 1.408, sobre tráfico de personas, supresión y suposición del estado civil y de la identidad y sustracción de menores.

Saludamos a usted con nuestra más distinguida consideración.

Acides H. López. — Mario C. Brook. — Antonio M. Hernández. — José M. Sorla Arch. — Carlos A. Orgaz. — Irma Roy. — Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente (Pierri). — Por Secretaría se dará lectura a la resolución de la Presidencia por la que se convoca a sesión especial.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Dice así:

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1993.

Visto la presentación efectuada por el señor diputado don Antonio Hernández y otros señores diputados, en el sentido de que se convoque a la realización de una sesión

especial, con el objeto de considerar el Orden del Día N° 1.402 (expediente 51-S.-92); y

CONSIDERANDO:

Los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Honorable Cámara.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º — Citar a los señores diputados a la realización de una sesión especial para el día miércoles 17 de noviembre de 1993, a las 14.30 horas, con el objeto de considerar el Orden del Día N° 1.408 sobre Código Penal y Procesal en relación al abandono de personas, supresión y suposición de estado civil y de la identidad y sustracción de menores. Modificación (expediente 51-S.-93).

Art. 2º — Comuníquese y archívese.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde que la Honorable Cámara resuelva considerar el asunto para el cual ha sido convocada esta sesión especial.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

3

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL
(Orden del Día N° 1.408)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad, han considerado el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en relación al abandono de personas, supresión y suposición del estado civil y de la identidad y sustracción de menores (expediente 51-S.-1993), y ha tenido en cuenta los proyectos dictaminados sobre el mismo y análogos temas del señor diputado Amadeo y otros (1.686-D.-1992); del señor diputado Amadeo (1.950-D.-1992); de la señora diputada Roy (2.344-D.-1992); de los señores diputados Larraburu y Soria (4.461-D.-1992); del señor diputado Martínez Raymonda y otros (5.008-D.-1992); del señor diputado Sánchez Galdeano (5.317 y 5.615-D.-1992); del señor diputado Meneghini (5.818-D.-1992); del señor diputado Argüello (5.869-D.-1992) y del señor diputado Ferradás (879-D.-1993) (Orden del Día N° 1.203); y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su sanción, con modificaciones en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese la denominación del capítulo II del Código Penal por el de

"Supresión y suposición del estado civil y de la identidad".

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 138 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 138: Se aplicará prisión de uno a cuatro años al que, por un acto cualquiera, hiciere incurrir, alterar o suprimir el estado civil de otro y el que lo recibiera en tal condición para mantenerlo en ella.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 139 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 139: Se impondrá prisión de uno a seis años:

1. A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le corresponden.
2. Al que, por un acto cualquiera, hiciere incurrir, alterar o suprimir la identidad de un menor de diez años.

La pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según las circunstancias del caso, respecto de los padres que hubieran actuado bajo la presión de circunstancias particularmente aflictivas. Si en el hecho interviniera una organización de tres o más personas, la pena para los integrantes de la misma será de tres a diez años de prisión.

Art. 4º — Incorpórase como artículo 139 bis del Código Postal el siguiente:

Artículo 139 bis: Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro al que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes y reglamentos a su cargo, causare o diere ocasión a que se produzca alguno de los hechos descritos en los artículos 138 y 139.

Art. 5º — Incorpórase como artículo 139 ter del Código Penal el siguiente:

Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión de uno a seis años el que con el fin de lucro promoviere, facilitare o de cualquier modo intermediare ilegítimamente en la adopción de una persona.

Si en el hecho intervinieren tres o más personas la pena será de dos a ocho años de prisión. La misma pena se impondrá al que hiciere de ello una actividad habitual.

Art. 6º — Incorpórase como artículo 139 quater del Código Penal, el siguiente:

Artículo 139 quater: Si el culpable de las conductas previstas en los artículos 136, 139 y 139 ter, fuere funcionario público o se hubiera valido de su arte, oficio o profesión, la pena de prisión

será aumentada en un tercio del mínimo y del máximo y se le aplicará, además, inhabilitación especial de cinco a diez años.

Art. 7º — Incorpórase como artículo 140 bis del Código Penal, el siguiente:

Artículo 140 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que ofreciere, diere o recibiere dinero, bienes u otro beneficios, a cambio de la entrega de una persona (artículo 15 de la Constitución Nacional). Si se tratare de un menor de edad la pena para los padres será de uno a seis años de prisión.

La pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según las circunstancias del caso, respecto de los padres que hubieran actuado bajo la presión de circunstancias particularmente aflictivas, con el propósito de que su hijo menor de edad sea inscrito como hijo propio por el receptor.

Los padres no serán punibles cuando bajo las mismas circunstancias hubieren actuado con el propósito de que su hijo menor de edad sea adoptado por el receptor.

El receptor que actúe con el propósito de inscribir al menor de edad como hijo propio, será reprimido con prisión de uno a cuatro años.

Si lo hiciere para adoptar al menor de edad, la pena será de un mes a dos años de prisión.

Art. 8º — Sustitúyese el artículo 146 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 146: Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que sustrajere a un menor de edad del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.

La pena se agravará en un tercio del mínimo y del máximo, si el autor tuviere la finalidad de traficar con los órganos o materia orgánica del menor.

Art. 9º — Incorpórase como artículo 146 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 146 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años el que condujere fuera de las fronteras de la República a un menor de edad a sabiendas de que fue objeto de las conductas previstas en los artículos 138, 139 y 140 bis párrafos primero y quinto.

El mínimo se elevará a seis años de reclusión o prisión si el menor hubiere sido objeto de la conducta prevista en el artículo 146.

Art. 10. — Incorpórase como artículo 146 ter del Código Penal el siguiente:

Artículo 146 ter: Si el culpable de las conductas previstas en los artículos 140 bis, párrafo primero, 146 y 146 bis, integrare una organización de tres o más personas, la pena de reclusión o prisión será aumentada en un tercio del mínimo y del máximo. Si además de aquellas conductas se hubiere valido de arte, oficio o profesión, sufrirá la pena

prevista en el párrafo anterior, y, además, inhabilitación especial de cinco a quince años. Si el hecho hubiere sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, la inhabilitación será absoluta y perpetua.

Art. 11. — Sustitúyese el inciso 2 del artículo 81 del Código Penal por el siguiente:

Inciso 2: Se impondrá prisión de uno a seis años a la madre que matare a su hijo mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal debidamente comprobada.

Art. 12. — Sustitúyese el artículo 107 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 107: El máximo y mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos y por estos contra aquéllos o por el cónyuge.

La madre que abandonare a su hijo mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal debidamente comprobada, será reprimida con prisión de un mes a dos años. Si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima la pena será de uno a cuatro años de prisión. Si ocurriere la muerte la prisión será de uno a seis años.

Art. 13. — Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 292 del Código Penal por el siguiente:

Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 18 de agosto de 1993.

Antonio M. Hernández. — Irma Roy. — Víctor H. Soderio Nievas. — Mabel G. de Mailli. — Jorge R. Marcó. — Jorge A. Agnudez. — Enrique A. Bischof. — María del Pilar Bermúdez. — José J. Manu. — Alberto E. Balestrini. — Mario C. Brook. — Gerardo A. Cabrera. — Juan P. Cafi. ro. — Jorge C. Daud. — Fernando P. Can. — Gustavo A. Green. — Alejandro H. López. — Ricardo F. Molinas. — Gastón H. Ortiz Maldonado. — Ana I. Piccinini. — Raúl E. Rodríguez. — Augusto J. Spinosa. — Jorge R. Yoma. — Néstor A. Varela.

En disidencia parcial:

Gabriela M. González Gass. — Miguel A. Ortiz Pellegrini.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones comparten plenamente la iniciativa venida en revisión. A tal punto es así, que el día anterior a la sanción de este proyecto por el Honorable Senado, esta Honorable Cámara, con fundamento en el dictamen de estas comisiones (Orden del Día N° 1.203), aprobó en general un proyecto sobre el mismo tema y otros estrechamente vinculados, cuyo trámite parlamentario quedó suspendido con motivo de la sanción del Honorable Senado. Las comisiones han resuelto aprobar este proyecto recogiendo algunas de sus normas y proponiendo modificaciones a otras disposiciones, inspiradas en el proyecto aprobado en general por esta Honorable Cámara. Así, se receptan con algunas modificaciones los artículos 4º, 5º y 6º que tratan la supresión y suposición del estado civil y el 9º, relativo a la falsedad, de la sanción del Honorable Senado.

Artículo 81, inciso 2. Infanticidio

La sanción del Honorable Senado suprime el infanticidio. Se aparta así de los criterios legislativos (leyes 17.567 y 21.338) y de los proyectos de Código Penal (Peco, artículo 115; Levene, artículo 138; Coll Gómez, artículo 118; Soler 1960, artículo 113 y Soler 1980, artículo 119; sanción del Honorable Senado 1990, artículo 78).

Las mencionadas leyes y algunos de los proyectos limitan la atenuación sólo con respecto a la madre. Lo mismo hizo el despacho de las comisiones (Orden del Día N° 1.203).

La supresión propiciada por el Honorable Senado emite a la madre, en estos casos, al estrecho marco punitivo constituido por la reclusión o prisión perpetua, salvo, claro está, que concurren circunstancias extraordinarias de atenuación —en cuyo caso correspondería de 8 a 25 años de prisión— o que sea de aplicación el artículo 34 del Código Penal.

Las comisiones estiman que debe mantenerse la figura, limitando la atenuación de la madre, habida cuenta que el estado fisio-psicológico en que puede encontrarse la mujer a raíz del parto —depresión, exaltación angustia, inestabilidad— debe merecer un tratamiento especial en el Código Penal. Núñez (*Derecho Penal*, tomo III), sostiene que se trata de un estado fisiológico-psicológico con un significado temporal subsidiario ya que su término es invariable e inseguro, agregando que las alteraciones fisiológicas con influencia psicológica que el parto y posparto pueden originar, es algo que los juristas, los tribunales y la ciencia no niegan (página 120 y siguientes).

Como se ha sostenido en doctrina la expresión de la ley “mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal” hizo pensar que tomaba en consideración la particular incidencia que el estado fisiológico del puerperio suele tener sobre el psiquismo de la mujer; mas como la expresión tampoco autoriza a excluir el atenuante cuando ese influjo psíquico no se ha producido realmente —como puede ocurrir—, se ha llegado a opinar que la ley presume que la madre sufre una alteración patológica de su psiquismo durante ese período,

Contraponiéndose a esta opinión, se ha sostenido que tal expresión de la ley no hace más que fijar un criterio temporal para la actividad de la autoría; ésta debe actuar mientras subsiste en ella el estado puerperal. Si bien la ley no exige que el puerperio haya producido trastornos psíquicos en la mujer para aplicar la atenuante, no cabe duda que la posibilidad fue tenida en consideración por el legislador, aunque sin otra pretensión que fijar el estado dentro del cual se debe producir la acción letal.

Pues bien, las comisiones han decidido, a fin de evitar interpretaciones dispares y limitar aún más la figura, que la madre debe efectivamente obrar bajo la influencia del estado puerperal, desplazando toda otra interpretación que lleve a pensar que la atenuación rige aun en el caso que ese estado fisiológico, ese influjo psíquico, no se haya producido realmente. Por otra parte las comisiones han elevado la pena.

Artículo 106. Abandono

La sanción del Honorable Senado eleva las penas. El código para el delito básico —abandono— contiene una pena de seis meses a tres años y para las agravaciones de tres a seis años (grave daño en el cuerpo...) y de tres a diez años (si ocurre muerte). Como antecedentes y con las mismas penas que el código vigente podemos recordar al proyecto Soler, 1960, artículo 141, igual en el proyecto Soler de 1980; Peco, artículo 130, sanción del Honorable Senado, Código Penal, 1990, artículo 94.

Se estima que las penas de la figura básica son adecuadas. En cuanto a las agravaciones hay que tener en cuenta que se trata de consecuencias preterintencionales toda vez que, para que esta figura sea aplicable, se requiere que esos resultados —lesiones o muerte— no estén comprendidos por la intención directa o eventual del autor, la que no puede haber ido más allá del conocimiento de una mera situación de peligro. Por ello, estimamos que debe mantenerse el texto vigente.

Artículo 107. Abandono. Agravación y atenuación

La sanción del Honorable Senado es igual al primer párrafo del despacho de las comisiones (Orden del Día N° 1.203).

Hemos considerado conveniente la incorporación del segundo párrafo para su adecuación con el infanticidio.

Artículo 146. Sustracción de menores

La sanción del Honorable Senado eleva las penas vigentes de tres a diez años, y cinco a quince años. El despacho de las comisiones (Orden del Día N° 1.203) castiga la sustracción con pena de tres a quince años.

Se considera conveniente mantener las penas del despacho de las comisiones por cuanto el mínimo obedece a un criterio más adecuado al principio de la flexibilización de las penas desde que no pueden descartarse casos en que el autor merezca la pena mínima.

Por otra parte debemos señalar que las comisiones han incorporado un segundo párrafo agravando la pena cuando el autor tuviere la finalidad de traficar con los órganos o materias orgánicas del menor.

Artículos 292, 293 y 297. *Falsedades*

El artículo 292 agrega entre los documentos con mayor protección "los certificados de parto y de nacimiento", incorporación que aconsejamos aceptar.

En cuanto al artículo 293 se considera que el agregado "o certificados" es innecesario por cuanto los certificados también son documentos. Además, el agregado de los "certificados de parto o de nacimiento" al artículo 297, es incorrecta habida cuenta que los mismos están expresamente contemplados en el artículo 292.

Artículo 316 del Código Procesal

Mediante su modificación se propicia imposibilitar la exención de prisión y la excarcelación cuando se impute alguno de los delitos previstos por los artículos 139, 139 bis y 146 del Código Penal.

Las comisiones consideran inapropiadas esta norma, los beneficios y limitaciones de estas instituciones deben merecer trato igualitario.

Tráfico o comercio de menores

El proyecto en revisión no incorpora específicamente el tráfico o comercio de personas. Quizás se haya querido comprender estos hechos en el artículo 139 bis, de la sanción del Honorable Senado, el que reprime con reclusión o prisión de tres a diez años, el que facilitar, promover o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos previstos en el capítulo "Supresión y suposición del estado civil y de la identidad".

Las comisiones entienden que la figura de comercio de personas debe considerarse expresamente en el Código Penal para atrapar una realidad delictiva que se viene dando en nuestro país con preocupante frecuencia. Es cierto que los autores se valen de las normas comisivas de los artículos 138 y 139 o de adopciones fraudulentas, pero generalmente subyace una "compraventa". También es cierto que resultará en extremo difícil probar la "compraventa", pero lo mismo ocurre con otros delitos, por ejemplo, la corrupción de funcionarios, y no por ello el legislador debe desconocerlo o no legislar sobre los mismos.

Además, si con las figuras de los artículos 138 y 139 de la sanción del Honorable Senado se pretende abarcar el comercio de menores, las penalidades previstas —uno a cuatro años, dos a seis años, respectivamente— obviamente no resultan adecuadas a la gravedad del delito de compraventa de personas, que se quiere castigar.

Por otra parte, el artículo 139 bis de aquella sanción se refiere a formas de participación —facilitar, intermediar— y sancionar a estos partícipes con penas mayores a la de los autores. Así, en algunos casos el autor tendría la de cuatro años de prisión, mientras que al partícipe le corresponderían de tres a diez años. Este criterio contradice los principios generales del Código Penal en cuanto a participación (artículos 45 y 46).

Por último conviene destacar que la norma propiciada por las comisiones viene a llenar una vacío legislativo. En efecto, algunos autores afirman que la "compraventa" de personas resulta impune toda vez que el Código

Penal no reprime el hecho de la compraventa de personas que la Constitución declara criminal. Para que no queden dudas que se sanciona el comercio de personas, las comisiones han resuelto señalar, en la misma norma, que se trata del delito al que se refiere el artículo 15 de la Constitución Nacional.

Así lo ha entendido también el Honorable Senado en un proyecto anterior, al sancionar "cualquier contrato de compraventa de personas" (artículo 134, media sanción del Código Penal de 1990).

Las comisiones han considerado inconveniente utilizar la palabra "compraventa" a fin de evitar cuestionamientos interpretativos. La compraventa como acto jurídico debe ser lícita (artículos 944 y 1.167 del Código Civil). Denominar "contrato de compraventa" cuando ésta tiene por objeto a una persona, se estima inapropiado toda vez que, a nuestro entender, no existiría en tal caso compraventa (artículo 1.323 del Código Civil), argumento y defensa que podrían esgrimirse en los casos de ocurrencia.

Atenuantes o eximentes de penas

Las comisiones han incorporado, con relación a los delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad (artículo 139) y de comercio de menores (artículo 140 bis) atenuantes o eximentes de penas en favor de los padres que hubiesen actuado, en la comisión de estos hechos, bajo la presión de circunstancias particularmente aflictivas. Estas circunstancias pueden ser de carácter económico o moral y, desde luego, sería de aplicación en aquellos casos en los que no concurren causas de justificación o disculpantes.

Intermediaciones ilegítimas

Por último, hemos resuelto incorporar el delito de intermediaciones ilegítimas en las adopciones (artículo 139 ter), sancionando a los promotores o intermediarios de las mismas. Recogemos así una creciente realidad delictiva.

Por todo lo expuesto las comisiones intervinientes consideran que el presente dictamen debe tener un tratamiento inmediato y preferencial por parte de esta Honorable Cámara.

Antonio M. Hernández.

FUNDAMENTOS EN DISIDENCIA PARCIAL

Acompaño por el presente los motivos que fundamentan la disidencia parcial con que he suscrito el dictamen de comisión que sobre supresión y suposición del estado civil, tráfico de niños, ha despachado la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad.

En efecto, en el dictamen citado se ha dado la siguiente redacción al artículo 11, con la cual disiento parcialmente:

Artículo 11: Sustitúyese el inciso 2 del artículo 81 del Código Penal por el siguiente: Inciso 2: Se impondrá pena de uno a seis años a la madre que matare a su hijo mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal debidamente comprobado.

El Código Penal de la Nación Argentina dispone textualmente en su actual redacción del inciso 2 del artículo 81 que: "Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal, y a los padres, hermanos, marido e hijos que para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a) del inciso 1 de este artículo".

Es decir, que para los parientes, de conformidad con lo estipulado en el apartado a) del inciso 1 del artículo 81, se exige el estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren excusables.

Lo que caracteriza el infanticidio como homicidio privilegiado en la legislación comparada, es el móvil de honor o el influjo que tiene sobre la madre el estado puerperal, ya sea que se adopte el criterio latino tradicional, ya que se siga el que inició el Código Federal suizo; aunque, como veremos, el código argentino estructura el infanticidio invocando ambas circunstancias, si bien a la segunda sólo le asigna un significado temporal.

El infanticidio, como figura atenuada del parricidio, es relativamente reciente.

El código español de 1822 figura entre los primeros en distinguirlo como una modalidad atenuada, exceptuando de la pena del parricidio a las mujeres solteras o viudas que, teniendo un hijo legítimo, lo mataran dentro de las primeras 24 horas del nacimiento, y teniendo como clara y expresa referencia al móvil del honor como único inspirador de la acción parricida.

El código de 1848, ya con un estilo legiferante acorde con los tiempos modernos, dispone: "La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo que no haya cumplido tres días, será castigada con la pena de prisión menor". El beneficio se extiende a los abuelos maternos "que para ocultar la deshonra de la madre cometieron este delito". Aparece ya el móvil de honor, que vamos a encontrar en el código argentino, y el término de tres días que fijó el Código de Baviera de 1813, y que será el impuesto por un grupo de códigos, entre los que se cuentan los argentinos de Tejedor y de 1886 (páginas 63/64).

En la legislación argentina aparece previsto el infanticidio en el código de Tejedor, como la muerte de un recién nacido, que no tenga tres días completos, cometido por la madre por ocultar su deshonra. Se extiende la calificación a los abuelos maternos que cometiesen el mismo delito para ocultar la deshonra de la madre.

El código de 1886 contiene las mismas exigencias y da a la norma la misma extensión que el de Tejedor. La ley 4.189 no modificó las exigencias, pero extiende la previsión a los padres, hermanos, marido e hijos que para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieron el mismo delito. Esa situación se mantiene en el proyecto de 1891 y en el de 1906.

En el derecho comparado pueden distinguirse en lo que hace al fundamento del trato legal privilegiado, dos sistemas básicos: el que lo sustenta en el móvil del honor, y el que se apoya en el estado psíquico que presenta o puede presentar la madre en el momento

del parto y mientras dure el estado puerperal. Este segundo sistema responde al Código Federal suizo, en cuyo artículo 116 se presumen los trastornos anímicos en el momento del nacimiento, aceptándose como posibles durante el estado puerperal. Este enfoque psíquico, fisiopsíquico o fisiopsicológico presenta las dificultades propias de toda prueba de la existencia real del estado psicológico en ese período de tiempo inmediato al nacimiento, por eso se llega al criterio de la presunción, y las del deslinde claro entre éste y las situaciones de inimputabilidad. Por otra parte, el privilegio sólo puede alcanzar a la madre. En la práctica, como la pericia médica es siempre posterior, la prueba de existencia o inexistencia del estado requerido se torna dificultosa, resultando así que, de hecho, también debe ser presumido, puesto que debe estarse a lo que resulte más favorable al procesado (véase Fontán Balestra, *Tratado de derecho penal argentino*, parte especial, página 65).

En nuestro derecho el propósito de ocultar la deshonra es el móvil que inspira a la acción y que no resulta imaginable en delitos culposos. Este elemento que como hemos visto caracteriza al infanticidio en los códigos de la corriente hispánica, ha sido objeto por eso mismo de una abundante interpretación doctrinaria y judicial. Su importancia se pone en evidencia con sólo señalar que concurriendo sin él todos los demás elementos de la figura, el hecho es un parricidio. Es este criterio que prevalece en la jurisprudencia: Corte Suprema Nacional ("J.A.", tomo 22, página 653), Cámara del Crimen de la Capital ("J.A.", tomo 21, página 514; "L.L.", tomo 97, página 711).

La ley tutela aquí el honor o la honra sexual, esencialmente en su aspecto objetivo, puesto que lo que cuida es la reserva de un hecho anterior que se estima deshonesto y del que el nacimiento sólo es una consecuencia tangible que ha de hacerlo conocido.

Al diseñar la ley el tipo del infanticidio sobre la base de un determinado móvil, no excluye la posibilidad de que el hecho de matar al hijo, a impulso de otros móviles, durante el nacimiento o mientras la autora se encuentra bajo la influencia del estado puerperal pueda ser incluido en el homicidio emocional que contempla el inciso 1 a) del mismo artículo 81, cuando se den las circunstancias requeridas en él. Se trata en la actual normativa de dos figuras distintas que no responden a ninguna de las situaciones de relación que caracterizan el llamado concurso de leyes. La madre que mata al hijo durante el nacimiento o mientras está bajo la influencia del estado puerperal, bien puede encontrarse en un estado de emoción violenta que las circunstancias hagan excusable, situándose así en la previsión del artículo 81, inciso 1 a) del Código: el momento, lejos de ser un obstáculo, constituirá un elemento más para apreciar la posibilidad de la emoción. El móvil ha de ser distinto del de ocultar la deshonra, pues con éste basta para calificar el hecho de infanticidio, sin necesidad de mentar la emoción violenta (ver Fontán Balestra, obra citada, página 70, y Ricardo C. Núñez, *Tratado de derecho penal*, tomo V, página 123). Ese particular estado pone a la mujer en condiciones psicológicas propicias para que obren la causa de honor

y otras como la miseria, las dificultades de la vida o las torturas morales, pero no resulta contradictorio que la ley únicamente admita que, dentro de ese marco fisiopsicológico, sólo excuse la causa de honor, pues se trata de una selección restrictiva de tipo político que no encuentra obstáculos científicos provenientes de la naturaleza de los estados concurrentes o de la naturaleza de la causa admitida y de las rechazadas.

Con arreglo a la fórmula del Código Penal, se puede decir que el propósito de ocultar la deshonra es el elemento alrededor del cual gira toda la serie de prescripciones contenidas en la ley respecto del infanticidio.

Por todo ello, no estoy de acuerdo con las prescripciones contenidas en la redacción del artículo 11 del Proyecto de comisión, ya que amplía el tipo penal de forma tal que cualquiera sea el motivo que lleve a la madre a cometer el delito bajo el estado puerperal se beneficie con la figura. En este sentido considero que es más conveniente la redacción que en la actualidad posee el Código Penal que restringe el mismo a la causa del honor.

Coincido por otra parte, con la exclusión de los pacientes como sujetos activos del infanticidio. Tal supresión ya había sido propuesta por los proyectos de 1951 y de 1960. En el sentido expuesto vale la pena recordar que Carrara, que sólo admite como autora a la madre, dice que el motivo que se valora como excusa de la madre (el pudor) es diferente que el valorado respecto de los terceros, en los cuales lo apreciable puede ser el amor o el honor de la familia (ver Núñez, obra citada, página 122).

Propongo por tanto la siguiente redacción al artículo 11 del proyecto de ley:

Artículo 11: Sustitúyese el inciso 2 del artículo 81 del Código Penal por el siguiente: inciso 2: Se impondrá pena de uno a cuatro años a la madre que para ocultar su deshonra matare a su hijo mientras se encontrare bajo la influencia del estado puerperal debidamente comprobado.

Gabriela M. González Cass.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 1º de julio de 1993.

señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que se encuentra en revisión a esa Honorable Cámara:

Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Derógase el inciso 2º del artículo 81 del Código Penal.

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 106 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 106: El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una

persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años.

La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.

Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 107 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 107: El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente serán aumentados en un tercio cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos, o por el cónyuge.

Art. 4º — Sustitúyese la denominación del capítulo II, título IV, libro II del Código Penal por el de "Supresión y suposición del estado civil y de la identidad".

Art. 5º — Sustitúyese el artículo 138 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 138: Se aplicará prisión de 1 a 4 años al que, por un acto cualquiera, hiciere incurrir, alterare o suprimiere el estado civil de otro.

Art. 6º — Sustitúyese el artículo 139 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 139: Se impondrá prisión de 2 a 6 años.

1. A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan.

2. Al que, por un acto cualquiera, hiciere incurrir, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare.

Art. 7º — Incorpórase como artículo 139 bis del Código Penal el siguiente texto:

Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad.

Incurrirá en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en este capítulo.

Art. 8º — Sustitúyese el artículo 146 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 146: Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.

Art. 9º — Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 292 del Código Penal por el siguiente:

Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.

Art. 10. — Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 293 del Código Penal por el siguiente:

Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años.

Art. 11. — Sustitúyese el artículo 297 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 297: Para los efectos de este capítulo quedan equiparados a los instrumentos públicos de los testamentos ológrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 263.

Art. 12. — Incorpórase en la parte final del párrafo segundo del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, el siguiente texto:

..., salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 139, 139 bis y 146 del Código Penal.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

ORALDO N. BERLOS.
Edgardo R. Pinzi.

OBSERVACION

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1993.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

Me dirijo a usted a los efectos de formular observaciones al Orden del Día Nº 1.408, de las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad, en los términos del artículo 95 de nuestro reglamento interno.

Si bien en términos generales estamos de acuerdo con el texto aprobado por las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad, el mismo padece de graves defectos puntuales que motivan las presentes observaciones que oportunamente expondremos.

Bien sabemos que la norma penal debe ser clara y precisa, acotando los márgenes de interpretación y evitando así la ambigüedad. Por el contrario, el proyecto

observado establece tipos penales desdibujados e imprecisos, así como carece de la redacción apropiada para un código penal y de la unidad y estructura que un cuerpo legal debe tener, confundiendo y quebrando el orden que necesariamente debe existir entre las figuras básicas, sus atenuantes y agravantes.

En lo que respecta a las observaciones puntuales al dictamen de las citadas comisiones, cabe destacar las siguientes:

Artículo 2º —

- a) En primer lugar considero que el mínimo de la pena prevista en el artículo 138 es de una levedad tal que posibilitaría que la misma no sea de cumplimiento efectivo.

Sin duda uno de los principales motivos que nos movieran a legislar al respecto fue —junto con la falta de tipificación del tráfico de menores— la necesidad de imponer penas severas a quienes incurrían en este delito.

Recordemos además que la mayor gravedad de las penas para este tipo de conductas criminales fuera reclamada no sólo por la sociedad sino también por el Poder Judicial.

- b) Consideramos que el individuo que realiza la conducta referida en la frase final del primer párrafo del artículo 138 (“...y a quien la recibiera en tal condición para mantenerlo en ella”) ya se encuentra comprendido en la leyenda “... por un acto cualquiera...”, del mismo párrafo. Por ello estimamos que la observada expresión final es redundante.

Artículo 3º — La consideración de “circunstancias particularmente aflictivas” (artículo 139, párrafo 4º) como atenuantes o eximentes de la situación de los padres que incurrían en la figura prevista, es de una imprecisión y laxitud tal que podría desvirtuar el espíritu de los legisladores, beneficiando injustamente a quienes no lo merecen.

Artículo 5º —

- a) Sin decirlo este dictamen pretende perseguir el tráfico de menores, de hecho lo hace en el artículo 140 bis que oportunamente analizaremos. Cualquiera sea el destino final del menor la intermediación del mismo será siempre delito de tráfico. Por ello carece de sentido la tipificación del artículo 139 ter, puesto que al intermediario de referencia le cabe la figura del 140 bis que incorpora el artículo 7º de este dictamen.

Entonces, hablar de adopción en este proyecto no hace más que confundir y oscurecer la tipificación de delito, más aún cuando impone penas más leves que las del 140 bis.

- b) Por último respecto a la graduación de las penas, valen las observaciones vertidas en el acápite a) del artículo 2º.

Artículo 6º — Merece las mismas observaciones que las hechas a los artículos 2º y 5º, si bien consideramos apropiado sancionar con mayor severidad a los funcionarios públicos y profesionales que incurran en el delito.

Artículo 7º —

- a) En primer lugar, con relación a la gravedad de las penas, sostenemos las observaciones realizadas en el acápite a) del artículo segundo;
- b) Creemos que la conducta reproachable de entregar a un menor a cambio de dinero, bienes u otros beneficios es aún más reproachable penalmente cuando el sujeto activo es uno o ambos padres del niño. Vale decir que el vínculo debe actuar como agravante y no como atenuante, así lo hace el Código Penal de la Nación, salvo cuando existen circunstancias atenuantes especiales; en cuyo caso son las circunstancias y no el vínculo las atenuantes;
- c) El párrafo segundo del artículo 140 bis del dictamen es pasible de idénticas observaciones a las realizadas al párrafo cuarto del artículo 139 del mismo proyecto (artículo 3º).

Respecto a la circunstancia atenuante enunciada en el mismo párrafo, *in fine*, del artículo 140 bis: "...con el propósito de que su hijo menor de edad sea inscrito como hijo propio por el receptor", entendemos inconveniente sea utilizada como justificación a la aplicación de menor pena a los padres pues no contempla los violados derechos del menor. Cualquiera fuere la intención de los padres "vendedores", no tiene relevancia respecto a la gravedad del daño infligido al niño. Asimismo, la circunstancia atenuante analizada es de una subjetividad inconveniente para una norma penal.

- d) El párrafo tercero del artículo 140 bis es, por tres razones, insostenible: primero y principal, nos preguntamos si la eximente de punibilidad confusamente enunciada apunta a la existencia de un error que impida comprender la criminalidad del acto. De ser afirmativa la respuesta, debemos concluir que la causal enunciada en el presente párrafo se encuentra comprendida en el artículo 34 inciso 1º del Código Penal de la Nación.

Por otro lado, tal como ha sido expuesto, el daño infligido al menor se produce y es de suma gravedad más allá de la subjetividad de los padres. Razón de más para justificar la aplicación de pena a los mismos. Finalmente, la situación descrita es de una subjetividad tal cuya aplicación podría desvirtuar el espíritu de la norma penal que se pretende incorporar, beneficiando injustamente a quienes no lo merecen.

- e) Una vez más el presente proyecto, específicamente ahora en los párrafos cuarto y quinto del artículo 140 bis, confunde institutos propios del derecho civil como el de la adopción con situaciones ilegales. La adopción tiene un régimen legal establecido por ley 19.134 que, *nos gusta o no*, sea o no perfectible, es la única

vía legal vigente para dar padres a un niño desamparado. Quien no utiliza este mecanismo legal sino que compra un menor y luego pretende valerse de la ley para tener de legalidad el acto viciado en su origen —cometiendo un fraude a la ley— es un delincuente y debe ser sancionado conforme la norma penal. De ninguna manera podemos premiarlo con atenuantes.

Artículo 9º.—

- a) Respecto de la levedad de las penas previstas en el artículo 146 bis, reiteramos las observaciones vertidas en el acápite a) del artículo 2º, máxime teniendo en consideración la mayor gravedad del daño producido al menor al quitarlo de su país, así como también la mayor dificultad para lograr la restitución del menor.
- b) Asimismo, nos oponemos a la inclusión del requisito de conocimiento que implica la expresión "a sabiendas, por entender que el agravante se encuentra justificado por la sola conducción del menor al exterior. Pensamos que es imposible sacar un niño fuera del país sin conocer la ilegalidad de la entrega del mismo; aun así, de ser posible la ignorancia de las circunstancias enunciadas estaríamos ante el error como causal de imposibilidad de comprensión de la criminalidad del acto (artículo 34 inciso 1º del Código Penal de la Nación).

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Roque Sánchez Galdeano.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en general.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en particular el artículo 1º. Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

—Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 2º al 10.

4

MOCIONES DE ORDEN

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: quisiera formular una moción de orden antes de que se termine de votar el proyecto de ley en consideración, porque una vez ocurrido esto correspondería que usted levante la sesión. Como deseamos considerar un tema distinto en esta sesión especial, solicito que me conceda el uso de la palabra a los efectos de formular una moción de orden.

consideración el dictamen con las modificaciones que ha aceptado la comisión a efectos de evitar cualquier inconveniente.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia considera muy oportuna la aclaración efectuada por el señor diputado por la Capital Federal.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez Sañudo. — Señor presidente: en efecto, se introdujeron modificaciones en dos artículos, que quedaron redactados tal como lo había planteado la bancada radical.

Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

7

MOCION DE SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez Sañudo. — Señor presidente: formulo moción de tratamiento sobre tablas del dictamen al que he hecho referencia, con las modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción y en consecuencia se incorpora el asunto al orden del día de la presente sesión.

8

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Prosigue la consideración en particular del proyecto de ley sobre modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal.

Se va a votar el artículo 11.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 12 y 13.

—El artículo 14 es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Habiendo sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.¹

9

CREACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

(Orden del Día Nº 1.528)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia —especializadas— han considerado el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Defensoría del Pueblo en jurisdicción del Poder Legislativo de la Nación; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su sanción en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Creación. Nombramiento. Cese y condiciones

CAPÍTULO I

Carácter y elección

Artículo 1º — Creación. Se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación al Defensor del Pueblo, la cual ejerce las funciones que establece la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

El objetivo fundamental de esta institución es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional, que se mencionan en el artículo 14.

Art. 2º — Titular. Forma de elección. Es titular de ese organismo un funcionario denominado defensor del pueblo quien es elegido por el Congreso de la Nación de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Ambas Cámaras del Congreso deben elegir una comisión bicameral permanente, integrada por siete (7) senadores y siete (7) diputados cuya composición debe mantener la proporción de la representación del cuerpo;

b) En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ley, la comisión bicameral reunida bajo la Presidencia del presidente del Senado debe proponer a las Cámaras de uno a tres candidatos para ocupar el cargo de defensor del pueblo.

Las decisiones de la comisión bicameral se adoptan por mayoría simple;

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 3330.)

2. DECLARACION

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio por las últimas declaraciones efectuadas por el ex militar y presidente de facto, Jorge Rafael Videla, en las que pretende reivindicar la más sangrienta dictadura militar de la Argentina.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y tres.

ALBERTO R. PIENRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.
 Secretaria de la C. de DD.

B. ASUNTOS ENTRADOS

I

Dictamen de comisión

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO:

ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA:

En el proyecto de ley del señor diputado Baglini y otros por el que se constituye la comisión administradora de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (3.673-D-93).

II

Proyecto de ley

Del señor diputado Baglini y otros: constitución de la comisión administradora de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (3.673-D-93). (*Sobre tablas.*)¹ (T. P. Nº 139, pág. 6260.)

III

Proyecto de declaración

Del señor diputado Ortiz Maldonado y otros: repudio de las declaraciones efectuadas por el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla (3.670-D-93). (*Sobre tablas.*)¹ (T. P. Nº 139, pág. 6253.)

C. INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SANCHEZ GALDEANO

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre modificación del Código Penal en materia de abandono de personas, supresión y suposición de estado civil y de la identidad, y sustracción de menores.

Ante el hecho de que los dos bloques mayoritarios de la Honorable Cámara de Diputados, han acordado, sin debate, aprobar el proyecto de ley en relación al abandono de personas, supresión y suposición del estado civil y de la identidad y sustracción de menores que obra en el Orden del Día Nº 1.408, por lo cual sería vano todo intento que pudiera realizarse con el objeto de introducirle modificaciones, por la presente inserción paso a detallar las observaciones y sustituciones que propongo:

Antes de entrar en el tema específico de este proyecto, debemos dejar en claro los conceptos que lo circunscriben:

Definición

Se entiende por tráfico de niños a toda acción delictiva, mediante la cual a un niño se le sustituyen ilegalmente sus progenitores, o es separado de sus padres con fines de lucro, ya sea en su totalidad o parte de él.

Modalidades

Varias son las modalidades de acción que comprenden de esta figura que se ha denominado "tráfico de niños", y que nosotros hemos aceptado como válidas, ellas son:

- a) La entrega del niño en cuidado;
- b) La cesión o regalo del niño;
- c) El abandono del niño;
- d) La venta directa del mismo;
- e) La venta directa a través de un intermediario;
- f) El robo o secuestro del niño, acción grave y perturbadora, para su venta dentro del país o en el exterior.

No he querido incorporar a este listado de modalidades, el delito de secuestro con fines de comercialización de sus órganos, que rebasan a mi entender los límites de esta figura penal.

¹ Proyecto cuya entrada en la presente sesión autorizó la Honorable Cámara.

Frente a este cuadro cada día más tenebroso, sombrío y alarmante, nuestro Código Penal no presenta ninguna sanción ni acción punitiva capaz de frenar este incremento delictivo, que afronta a nuestra sociedad.

Causas

Varias son las causas favorecedoras de este delito que día a día se incentivan:

- Problemas socioeconómicos de la madre, de la pareja, del ámbito familiar.

- Fallas ético-morales y religiosas dentro del grupo afectado.

- Trastorno grave de la afectividad maternal, y también de la pareja.

- Fines de lucro en el grupo afectado.

- Participación activa de ciertas asociaciones ilícitas que toman a los niños como una mercancía.

Los personajes intervinientes en todo este proceso delictivo, tienen connotaciones muy particulares, y que a veces nos provocan verdaderos estados de rechazo.

En primer lugar resaltamos a la madre del niño, cuyas características son muy especiales, por la distancia o diferencia del concepto y característica que tenemos de la madre. Generalmente se tratan de menores de edad, solteras, separadas de su núcleo básico familiar, abandonadas por su pareja, rechazadas y desamparadas por la comunidad a la cual pertenecen.

Le siguen mujeres a veces solteras, otras veces casadas, sumidas en la pobreza o en la miseria y que atribuyen a este nuevo hijo el posible agravamiento de su estado, hay además en esta circunstancia, una gran complicidad por parte de su esposo, compañero o pareja y a veces también por otros familiares.

Continúan determinados agentes sanitarios, léase médicos, parteras, enfermeras, administrativos, que actúan como intermediarios en este complicado proceso del tráfico de menores.

También aparecen con rasgos mucho más marcados, una serie de delincuentes que instrumentan todo este proceso, que actúan solitariamente o en asociaciones, constituyendo verdaderas empresas de diferentes tipos, conexiones y organizaciones que pueden llegar a tener un cierto grado de complejidad y con vinculaciones en el exterior.

Objetivos

- Donación o cesión por creer que aumentará las posibilidades de mejorar la calidad de vida del niño, que no tienen otros miembros del grupo familiar.

- Llenar el vacío que presentan parejas sin hijos, y que han recorrido el camino tortuoso de su infecundidad, favorecido por lo engorroso de las tramitaciones de adopción.

- Venta del hijo para solucionar un doble problema. Económico para el donante y la infecundidad del receptor.

- Sustracción o robo del niño para su venta a pa-

— Sustracción o robo de los niños, para satisfacer las necesidades del mercado extranjero.

Camino de solución

Los diferentes caminos que la sociedad debe recorrer, con la finalidad de evitar el incremento del tráfico de menores y tratar en lo posible que el mismo desaparezca, son varios y de diferente índole.

a) Establecer mecanismos de acción social de manera tal que se proteja económicamente, en primer lugar, el embarazo de aquellos grupos más necesitados y extender esa protección al niño, no solamente recién nacido, sino también en las tres etapas de su desarrollo;

b) Desarrollar mecanismos de acción social, familiar y comunitaria, de manera tal, que el embarazo deje de ser un estado de rechazo de los diferentes sectores, y éstos se transformen en elementos de protección, comprensión y ayuda para la madre desamparada;

c) Desarrollar una acción de educación dentro de la comunidad para que el embarazo sea cual fuere sus circunstancias, siempre sea motivo de orgullo y no de discriminación y deshonra;

d) Elaborar instrumentos legales para evitar la pérdida de la identidad del niño, desarrollando las instituciones que hacen a la adopción, cumplimentando las disposiciones de las Naciones Unidas, en cumplimiento de los derechos del niño por ella sancionada;

e) Combatir penalmente todas las acciones que favorecen el desarrollo de esta figura delictiva que hemos denominado "tráfico de menores".

Estos caminos que hemos sintetizado para tratar de alcanzar una solución al tema que nos ocupa, deben ser seleccionados de acuerdo a las circunstancias de cada caso, pero siempre debe tenerse en cuenta un elemento importantísimo, que es el respeto que la sociedad debe tener al niño, de tal manera que se garantice en forma permanente, sus derechos a desarrollar su propia identidad, al conocimiento de sus orígenes y al ejercicio de su libertad.

El niño en su desarrollo está condicionado por dos tipos de factores, uno el fenotipo o sea los factores externos, que imprimen de acuerdo a las características de cada entorno, una modalidad determinada y, el otro, el genotipo, que son los factores internos impresos desde el mismo momento de su concepción. Estos dos factores condicionan la estructura neuropsicofísica constitucional del individuo.

En esta sesión la Honorable Cámara se aboca al tratamiento del último de los caminos de solución que hemos enunciado, es decir, a la reforma del Código Penal en lo referente a los delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad y sustracción de menores, expresados en el Orden del Día N° 1.408.

Con respecto a este tema he presentado un proyecto de ley de modificaciones al Código Penal de la Nación sobre delitos contra los menores, publicado en el Trámite Parlamentario N° 213, del año 1992, expediente 5.317-D-92, con modificaciones en el 5.615-D-92, que si bien en líneas generales concurren al mismo fin, para definir

Este conjunto de acciones delictivas que hemos dado en llamar tráfico de menores, tiene con respecto al proyecto que vamos a tratar, diferencias sustanciales en algunos conceptos que no aceptamos, pero sobre todo, la diferencia más importante estriba en el *quantum* de las penas.

Este tráfico de menores está constituido por una sujeción de hechos que van desde la instigación a una madre a donar o vender a su hijo hasta la sustracción —violenta o no—; pasando aquí por la participación de médicos, parteras, enfermeras, etcétera, con intervención a veces de funcionarios públicos, que dan una aparente legitimidad a lo que en realidad constituye un delito. Un aparte merecen las asociaciones ilícitas que organizan e interrelacionan cada una de las etapas del tráfico.

Hay en nuestro Código Penal un cierto vacío legal que facilitaría la compra y venta de niños e impediría la aplicación de penas suficientemente severas que la gravedad del delito nos señala así como también la peligrosidad de los delincuentes que en algunos casos se ponen de manifiesto.

Pero además de este vacío penal cada día tomamos una mejor conciencia de la responsabilidad que la sociedad tiene frente a esta agresión que en muchas ocasiones, impunemente se hace a la personalidad y sobre todo al bien de la identidad del niño.

En mi actividad de médico he visto en muchas, en muchísimas ocasiones, cómo se vulneran estos principios fundamentales reconocidos como los derechos del niño, tal como salvaguardar su propia identidad, su individualidad y su libertad para disponer el camino que él quiere trazar para el desarrollo de su personalidad.

No quisiera que la extensión de la discusión de este proyecto de ley contribuya a demorar su sanción, por lo cual manifiesto mi aceptación en general del despacho elaborado por las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad y haré las propuestas de modificaciones en el momento de su tratamiento en particular.

Modificaciones en particular

Las modificaciones que propongo es elevar la pena por considerar leves las propuestas en el dictamen de la comisión, por cuanto en reiteradas ocasiones la sociedad argentina, ha expresado y reclamado una mayor condena, así como también lo ha hecho en el mismo sentido, el Poder Judicial.

Además, propongo la supresión de la frase final del primer párrafo del artículo 138 ("... y a quien lo recibiera en tal condición, para mantenerlo en ella"), ya que este concepto se encuentra comprendido en la expresión "... por un acto cualquiera..." del mismo párrafo, lo que me da la impresión de ser una expresión repetitiva.

El texto que propongo se apruebe es el siguiente:

"Artículo 2º: Sustitúyese el artículo 138 del Código Penal por el siguiente:

"Artículo 138: Se aplicará prisión de dos a seis años al que por acto cualquiera, hiciere incurrir, alterar o suprimiere el estado civil de otro."

Artículo 3º:

En este artículo que se refiere al 139 del Código Penal proponemos la supresión total en el punto 2, segundo párrafo de la siguiente expresión: "La pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según las circunstancias del caso, respecto de los padres que hubieran actuado bajo la presión de circunstancias particularmente aflictivas".

Esta expresión de circunstancia particularmente aflictiva, es demasiado vaga, imprecisa, para poder actuar como atenuante ante un delito que día a día comprendemos más su gravedad, por el inmenso daño que puede provocarle a un niño en estas condiciones.

La aflicción es un sentimiento que está en relación con la personalidad del sujeto que la padece, más que como consecuencia del acto físico o moral que lo produce. Estimo que para la protección que la sociedad debe darle a un menor de 10 años, para proteger su identidad, no debe permitirse ninguna desgravación de la pena como la que se recomienda.

Artículo 4º: Sin modificaciones.

Artículo 5º:

Este artículo, como está expresado en el dictamen de las comisiones actuantes, en cierta manera quiere crear un concepto encubierto del tráfico de menores, al establecer una figura de intermediario ilegal en la adopción de una persona. El delito de tráfico del niño está señalado en el primer párrafo del artículo 139 ter cuando expresa: "con fin de lucro promover, facilitar o de cualquier modo intermediare ilegalmente en la adopción de una persona". Esta adopción ilegal pertenece a una forma o variable del tráfico del niño.

Por estas razones, considero necesario elevar las sanciones de dos a seis años de prisión.

Y con respecto al segundo párrafo, y considerando que la intervención de tres o más personas agrava el delito, creo necesario aumentar las penas de tres a nueve años.

Artículo 6º:

A este artículo que trata de la incorporación del artículo 139 quater le hacemos las mismas observaciones que le hicéramos a los artículos 2º y 5º, por lo cual consideramos insuficiente el castigo que se le impone, por lo cual proponemos el siguiente texto para su aprobación:

"Artículo 139 quater: Si el culpable de las conductas previstas en los artículos 138, 139 y 139 ter, fuere funcionario público o se hubiere valido de su arte, oficio o profesión, la pena de prisión se aumentará de cinco a veinte años y se le aplicará, además, inhabilitación especial del doble de la pena impuesta."

Artículo 7º:

Con respecto al artículo 140 bis del Código Penal, queremos señalar:

a) En primer lugar con relación a la gravedad de las penas, sostenemos las observaciones realizadas en el artículo 2º.

b) Creemos que la conducta reprochable de entregar a un menor a cambio de dinero, bienes u otros

beneficios, es aún más reprochable penalmente, cuando el sujeto activo es uno o ambos padres del niño. Vale decir que el vínculo debe actuar como agravante y no como atenuante, y así lo hace el Código Penal de la Nación, salvo cuando existen circunstancias atenuantes especiales; en cuyo caso son las circunstancias y no el vínculo las atenuantes.

c) El párrafo 2º del artículo 140 bis del dictamen, es pasible de idénticas observaciones de las realizadas al párrafo 4º del artículo 139 del mismo proyecto, involucradas en el artículo 3º.

Respecto a la circunstancia atenuante, enunciado en el mismo párrafo, *in fine*, del artículo 140 bis: "...con el propósito de que su hijo menor de edad sea inscrito como hijo propio del receptor", entendemos inconveniente su utilización como justificación a la aplicación de menor pena a los padres, pues no contempla los violados derechos del menor. Cualquiera fuere la intención de los padres "vendedores", no tiene relevancia respecto a la gravedad del daño infligido al niño. Así mismo, la circunstancia atenuante analizada es de una subjetividad inconveniente para una norma penal.

d) El párrafo 3º del artículo 140 bis, es por tres razones insostenible: primero y principal la excepción de punibilidad confusamente enunciada apunta a la existencia de un error que impide comprender la criminalidad del acto por lo cual se encontraría comprendida en el artículo 34, inciso 1º, del Código Penal de la Nación.

En segundo lugar, tal como ha sido expuesto anteriormente, el daño infligido al menor se produce, y es de suma gravedad, más allá de la subjetividad de los padres. Razón de más para justificar la aplicación de pena a los mismos.

Finalmente, la situación descrita es de una subjetividad tal, cuya aplicación podría desvirtuar el espíritu de la norma que se pretende incorporar, beneficiando injustamente a quienes no lo merecen.

e) Y con respecto al 4º y 5º párrafos de este artículo 7º, en ellos se confunden institutos propios del derecho civil como el de la adopción con situaciones ilegales. La adopción tiene un régimen legal, establecido por ley 19.134 que, nos guste o no, sea o no perfectible, es la única vía legal vigente para dar padres a un niño desamparado. Quien no utiliza este mecanismo legal, sino que compra un menor y luego pretende valerse de la ley para teñir de legalidad el acto viciado en su origen —cometiendo un fraude a la ley— es un delincuente y debe ser sancionado conforme la norma penal. De ninguna manera podemos premiarlo con atenuantes.

Por lo tanto el artículo 7º del proyecto en consideración quedaría redactado de la siguiente manera:

"Incorpóranse al Código Penal de la Nación los artículos 140 bis, 140 ter, 140 quater y 140 quinquies, conforme a la siguiente redacción:

"Artículo 140 bis: Será reprimido con prisión de cuatro a doce años el que, con ánimo de lucro, realice una operación de tráfico de menores de edad.

"Artículo 140 ter: Se aplicará prisión de cinco a veinte años:

"1. Al que con ánimo de lucro entregare a su hijo como objeto de una operación de tráfico de menores, salvo el caso del artículo 140 quater.

"2. Al que intermediare en el tráfico comprando un menor con intención de venderlo.

"3. Al que cometiere el delito mediante ardil, engaño o aprovechando la minoría de edad, o la alteración de las facultades mentales de la madre.

"4. Al que cometiere el delito explotando el estado de necesidad, o indefensión psíquica o física de los padres, tutores o guardadores del menor.

"5. Al que cometiere el delito integrando una organización o agencia dedicada al tráfico de menores.

"6. Al que cometiere el delito con intención de enviar al menor al extranjero.

"En los casos de los incisos 5º y 6º del presente artículo, la pena podrá ser de reclusión.

"Artículo 140 quater: Se impondrá prisión de seis meses a un año a la madre soltera menor de edad que con ánimo de lucro entregare a su hijo como objeto de una operación de tráfico de menores.

"Cuando la madre soltera menor de edad fuera reincidente en el mismo delito, la pena será de prisión de uno a dos años.

"Artículo 140 quinquies: Serán reprimidos con prisión de cinco a veinte años e inhabilitación especial por doble tiempo, los funcionarios o empleados públicos, profesionales de la salud y autoridades o dependientes de centros privados de asistencia médica, que en ejercicio o con ocasión de sus funciones cometieren el delito del artículo 140 bis."

Artículo 8º: Sin modificaciones.

Artículo 9º:

En primer lugar respecto de la levedad de las penas previstas en el artículo 146 bis, reitero las observaciones vertidas del artículo 2º, máxime teniendo en consideración la mayor gravedad del daño producido al menor al quitarlo de su país, así como también la mayor dificultad para lograr la restitución del menor. Por lo cual solicito que se amplie la penalidad de cinco a veinte años.

Y en segundo lugar, nos oponemos a la inclusión del requisito de conocimiento que implica la expresión: "a sabiendas", por entender que el agravante se encuentra justificado por la sola conducción del menor al exterior. Pienso que es imposible sacar un niño fuera del país, sin conocer la ilegalidad de la entrega del mismo: aun así, de ser posible la ignorancia de las circunstancias enunciadas, estaríamos ante el error como causal de imposibilidad de comprensión de la criminalidad del acto (artículo 34, inciso 1º, del Código Penal de la Nación). Por lo expresado propongo que el artículo 9º quede expresado de la siguiente manera:

Artículo 9º:

"Incorpórase como artículo 146 bis del Código Penal el siguiente:

"Artículo 146 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a veinte años el que condujere fuera de las fronteras de la República a un menor de edad

que fue objeto de las conductas previstas en los artículos 138, 139 y 140 bis.

"El mínimo se eleva a seis años de reclusión o prisión, si el menor hubiere sido objeto de la conducta prevista en el artículo 146."

Artículo 10: Sin modificación.

Artículo 11: Sin modificación.

Artículo 12: Sin modificación.

Artículo 13: Sin modificación.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BROOK

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre modificación del Código Penal en materia de abandono de personas, supresión y suposición de estado civil y de la identidad, y sustracción de menores.

En mi carácter de miembro de las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad, y en respuesta a las observaciones y disidencias parciales formuladas por algunos señores diputados respecto del dictamen conjunto contenido en el Orden del Día N° 1.408, quiero manifestar lo siguiente:

En oportunidad del tratamiento del artículo 2º referente a "Alteración de estado civil", el señor diputado Sánchez Galdeano observó por su levedad el mínimo de la pena prevista en el artículo 138.

Al respecto, nos enseñaba el maestro Soler que en las críticas que a las penas se dirigen por su levedad o benignidad, generalmente se incurre en superficiales confusiones entre lo que es propio de la ley penal y lo que corresponde a la actividad investigadora para descubrir a los autores de un hecho, a la organización de la administración de justicia o a otros aspectos vinculados con la actividad represiva. Se supone, con demasiada ligereza, que la ocurrencia de un delito es por sí misma la prueba de una deficiencia de la ley penal, consistente en la levedad de la pena conminada. Desde luego, el mal de ese reproche a la ley penal, más que en su error consiste en la engañosa facilidad del remedio que sugiere, el de aumentar la pena correspondiente que se habría mostrado inidónea para suprimir el delito, como si ésa fuera la función de la pena y no la más modesta o menos ambiciosa de tutelar los derechos reprimiendo las transgresiones, cuya existencia es una condición de toda sociedad humana. Agregaba el maestro que aquella engañosa facilidad es mala, porque nada cuesta, en efecto, poner la frase "diez años" donde decía "cinco años" y descansar así en la ilusión de que se ha hecho lo que era necesario para corregir un mal. Algunas veces, no muchas, la corrección es oportuna, pues la ley, en efecto, contiene algunos errores en la valoración de la relativa gravedad de los hechos. Es necesario cuidarse, sin embargo, aun en esos casos, de creer, que con ello sólo la estadística criminal experimentará una disminución.

No obstante estas consideraciones y con relación al proyecto en tratamiento la comisión considera que el mismo significa un importante logro en cuanto recepta realidades delictivas que la comunidad reclama. Así eleva la pena de algunas conductas del artículo 138, establece la figura contenida en el artículo 139, incorpora

la figura de la adopción fraudulenta, incorpora como artículo 140 bis, mediante una fórmula amplia, la compraventa de personas, la que, a criterio de buena parte de la doctrina resulta impune, agrava considerablemente la escala penal en la sustracción de menores, incorpora la figura de conducción al extranjero de un menor.

También observa el señor diputado la frase final del primer párrafo del artículo 138 ("...y el que lo recibiera en tal condición para mantenerlo en ella") por entender que este hecho ya se encuentra comprendido en la expresión "...o por cualquier otro acto..." del mismo párrafo.

Las comisiones entienden que se trata de distintos supuestos y que pueden darse en distintos tiempos. La locución "o por cualquier otro acto" es una fórmula que, obviamente, persigue abarcar los distintos casos que pueden presentarse para la configuración del delito. Estos medios comisivos pueden ser concretados por personas distintas a la que posteriormente recibe a la persona. Además, si se tratare del mismo sujeto ningún conflicto generaría la aplicación de esta disposición.

En lo atinente al artículo 3º, "Alteración de identidad", afirma el señor diputado que la consideración de "circunstancias particularmente aflictivas" (artículo 139 párrafo cuarto) es imprecisa.

La comisión ha incorporado en el artículo 139 atenuantes o eximientes de penas para aquellos casos en los que no concurren las exigencias del artículo 34, inciso 3, del Código Penal, en cuanto, como es sabido, no resulta suficiente la invocación de un estado de necesidad genérico para que la justificación pueda merecer acogida: es indispensable que el valor de los bienes esté en la relación querida por la ley, la inminencia del mal que se quiere evitar etcétera. Luego, estas circunstancias establecidas en el artículo 139 tienen distinto carácter que la causa justificante del artículo 34, inciso 3º, del Código Penal, y pueden ser de carácter económico o moral. Obviamente que estas circunstancias serán de aplicación en aquellos casos en los que no concurren causas de justificación o disculpantes.

Observa también el señor diputado el artículo 139 ter por entender que el intermediario en las adopciones fraudulentas está comprendido en el tráfico de menores del artículo 140 bis.

No parece acertada la observación habida cuenta que pueden ocurrir casos de intermediaciones fraudulentas de adopción sin que exista tráfico o "compraventa" de menores. Desde luego que de existir el tráfico, la figura del artículo 139 ter será desplazada por la del artículo 140 bis.

Vuelve el señor diputado a observar la levedad de las penas. Además entiende inconvenientes las circunstancias atenuantes o eximentes de penas contenidas en el artículo 140 bis.

Estas circunstancias han sido objeto de largas y profundas consideraciones durante el trabajo de las comisiones, habiéndose concluido que el legislador no puede desconocer realidades que, emparentadas con el estado de necesidad u otras causas exculpantes y sin confundirse con los mismos, aconsejan esta solución.

Concluye el señor diputado la observación a este artículo, afirmando que en esta norma se confunden institutos propios del derecho civil como el de la adopción con situaciones ilegales.

La crítica aparece injusta. El artículo 140 bis no legitima estas adopciones. El tema, en todo caso, deberá ser ventilado en otra sede jurisdiccional. Lo que han tenido en la mira las comisiones, desde la óptica penal, es el propósito de los padres y del receptor y, especialmente, el interés de los menores.

Reitera su crítica en cuanto a la levedad de las penas previstas por el artículo 99 para quien condujera a un menor fuera de las fronteras, "máximo teniendo en consideración la mayor gravedad del daño producido al menor al quitarlo de su país...".

Las penas previstas en este supuesto son de reclusión o prisión de 3 a 15 años, conteniendo una agravación que eleva el mínimo a 6 años y otra agravación en el artículo 146 ter, mediante la cual se aumenta en un tercio el mínimo y el máximo.

Las comisiones mantienen su texto y lo hacen convencidas de la razonabilidad y racionalidad de las penas. Es muy sabido que la certeza y prontitud de la pena son factores preventivos de mucho mayor poder que la cantidad de ella y, en este caso, la pena es francamente severa.

Observa también el señor diputado las palabras "a sabiendas" en el artículo 146 bis "por entender que el agravante se encuentra justificado por la sola conducción del menor al exterior. Piensa el señor diputado que es imposible sacar a un niño fuera del país sin conocer la ilegitimidad de la entrega del mismo.

Precisamente las comisiones han estimado conveniente remarcar el elemento subjetivo mediante el término "a sabiendas" ya que puede ocurrir que el sujeto ignore que el menor hubiere sido objeto de las conductas previstas en los artículos 138, 139 y 140 bis, párrafos 1º

y 5º. De ahí que no compartamos el criterio del señor diputado y no consideremos conveniente en estos casos recurrir a la fórmula exculpante del error del artículo 34 del Código Penal, cuando el legislador puede resolver el posible conflicto en la misma norma.

La señora diputada Gabriela González Gass, por su parte, ha formulado disidencia parcial con el dictamen de la mayoría propiciando se mantenga el motivo de honor —para ocultar su deshonra— para el delito de infanticidio. Sostiene que con la redacción propuesta por las comisiones se amplía el tipo penal de forma tal que cualquiera sea el motivo que lleve a la madre a cometer el delito bajo el estado puerperal se beneficiará con la figura.

Considera que es más conveniente la redacción que en la actualidad posee el Código Penal que restringe el mismo a la causa de honor.

En primer término debo señalar, que las comisiones han entendido que los profundos cambios sociales que se han operado desde la sanción del Código Penal vigente —han transcurrido siete décadas— tornan injustificado o inaceptable mantener aquel motivo de honor como excusa en este delito. Indudablemente la censura o intolerancia a la maternidad irregular ya no existe en nuestra sociedad. Luego, mantener en estos tiempos el motivo de honor como excusa o atenuante se nos presenta francamente inadmisibles.

Las comisiones, en su despacho, han optado por otro criterio que el vigente, propiciado por la señora diputada. El enfoque del despacho parte de la idea, siguiendo a L. Núñez, que las alteraciones fisiológicas con influencia psicológica que el parto y posparto pueden originar, es algo que los juristas, los tribunales y la ciencia no niegan. Por ello, el legislador no puede remitir a la madre, en estos casos, al estrecho marco punitivo de la reclusión o prisión perpetua. Debemos mantener vigente el delito menor del infanticidio sin apoyarnos exclusivamente en el motivo del honor.

Pensamos que la crítica de la señora diputada González Gass no puede merecer acogida toda vez que en el tipo penal proyectado se ha limitado la figura: la madre debe efectivamente obrar bajo la influencia del estado puerperal, es decir necesariamente debe ser afectada por trastornos psíquicos debidamente comprobados, y los móviles, desde luego, pueden ser distintos del fin del honor.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MENECHINI

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre modificación del Código Penal en materia de abandono de personas, supresión y suposición de estado civil y de la identidad, y sustracción de menores.

Debo expresarle mi beneplácito por la definitiva sanción en esta Honorable Cámara, de un proyecto cuyo objetivo principal es darle encuadre jurídico al delito de suposición de estado civil y sustracción de menores que nuestro derecho positivo no contemplaba.

Importantes causas penales dan cuenta de la existencia de organizaciones delictivas cuyo objetivo es el tráfico de niños, tanto en nuestro país como en el extranjero. La realidad nos impone del accionar delictivo que no repara en escrúpulos: adelantan partos, tienen el cabello del recién nacido, ofrecen con total desaprensión el cambio de un bebé por otro, falsas madres concurren a escribanías a ceder derechos de guarda de los menores, se retiran parturientas de hospitales para que

den a luz en casas particulares, venden recién nacidos cotizándolos en dólares según la pigmentación y el color de ojos.

Parteras, enfermeras, particulares, empleados administrativos de hospitales, maternidades y de los registros civiles, integran principalmente estas asociaciones delictivas que despliegan su accionar en nosocomios, maternidades y barrios marginales, tanto en la Capital como en el interior del país, secuestrando a recién nacidos de la esfera de custodia de sus padres. Roban o convencen a madres generalmente jóvenes, solteras, menores de edad y de escasos recursos, a entregar al niño o al futuro bebé, bajo promesa de proporcionar a la criatura una excelente calidad de vida. Lejos del eje argumental, el verdadero móvil es el comercio infame de niños.

De este modo menores indefensos se han incorporado al universo de bienes de nuestra sociedad de consumo; seres humanos que pasan a estar sujetos a las leyes del mercado.

El vacío existente en nuestra legislación sobre este incalificable tráfico de personas, ha impulsado numerosos proyectos que la intensa actividad de las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer y Minoridad han logrado compatibilizar en un solo proyecto que hoy someten a consideración de vuestra honorabilidad.

Compartimos la tipificación efectuada, que en lo relativo a tráfico de menores, sigue los lineamientos generales de nuestro proyecto contenido en expediente 5.818-D-92.

Surge nuestra discrepancia al contemplar las penas impuestas a los delitos contenidos en los artículos 140 bis, 146, 146 bis del Código Penal, esto es a los delitos de disposición ilegítima de personas y tráfico irregular de menores de edad que son trasladados fuera de la frontera de la República.

Las sanciones impuestas permiten la excarcelación de los imputados o procesados, y es por ello que considero debe el mínimo de la pena ser elevado a 4 años, por estimar que, sin incurrir en sobrevaloraciones, son tan execrables los delitos que no se puede gozar del beneficio de excarcelación.

Nos encontramos frente a ilícitos que violan derechos personalísimos e intereses jurídicos protegidos constitucionalmente (artículo 15 de la Constitución Nacional), produciendo un daño efectivo que afectan la identidad de las personas y rompen los vínculos familiares.

Al componer una ley el legislador no puede dejar de medir las exigencias de seguridad, paz y orden social, que las conductas criminosas comprometen.

Todo hecho, sólo del derecho puede recibir justificación, deviniendo inexplicable que los ilícitos mencionados puedan favorecerse con el beneficio de excarcelación, no existiendo ley ni principio de necesidad que se vulnere con la denegatoria del beneficio. Por otra parte, el régimen de excarcelación funciona simplemente como una medida cautelar que no contradice ninguna garantía constitucional, destinada a asegurar tanto la tramitación de la causa como la eficacia de la sentencia.

Al establecer el proyecto observado el mínimo de tres

años confiere a los jueces una elasticidad que no se adecua a las hipótesis delictuales en cuestión, con el riesgo de que meras causas de impunidad dejen subsistente la ilicitud intrínseca del acto.

La observación que formulo no implica un ataque a las facultades dogmáticas de los jueces de interpretación y aplicación de la ley, ni a la regla de la sana crítica. Por el contrario, jueces y asesores de menores consultados se han pronunciado sosteniendo las dificultades para la obtención de pruebas concretas en estos ilícitos, como asimismo para decretar la asociación ilícita.

Dadas las dificultades procesales apuntadas, deviene propio admitir, que paralelamente existen riesgos de impunidad a los que la ley debe poner coto.

A la naturaleza abominable de los ilícitos que se tipifican, debemos agregar la peligrosidad de sus autores, que actúan formando asociaciones delictivas que no reparan en escrúpulos y que exhiben total desinterés por valores humanos.

Hemos compulsado la causa 10.114 tramitada ante el juez en lo criminal de instrucción de menores de esta ciudad de Buenos Aires, y que fue iniciada el 24 de mayo de 1990 por la supuesta comisión de los delitos de sustracción de menores, suposición de estado civil y falsificación de documentos, que conteniendo cinco casos de disposición de menores debidamente comprobados en cinco cuerpos concluyen con la liberación de la principal imputada.

En uno de los casos el bebé recibido debió ser sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo, a la que la traficante se opuso expresando textualmente "tenés que devolverlo, ser fría, no pensar que se trata de un bebé o que es tu hijo". "Yo no puedo comprometerme entregando un bebé enfermo." "Yo con él hago un paquetito y a la basura, que no pienses en cementerio ni nada." "Yo de él me tengo que deshacer pues no puedo dárselo a nadie." (Fojas 898, II cuerpo.)

Para robustecer los argumentos expuestos sobre la elevación del mínimo de la pena de cuatro años, el Código Penal prevé en el artículo 170 sobre secuestro extorsivo, la pena de reclusión o prisión de cinco a quince años.

Lógicamente admitiendo las diferencias existentes entre ambas figuras, las dos contemplan las hipótesis delictuales de sustracción, retención y ocultamiento; como asimismo, la finalidad de la obtención de un beneficio dinerario, que en uno será el rescate y en el otro la prestación.

Difícil también explicar la disparidad de criterios entre las penas impuestas en la ley 24.241 y la propuesta.

La ley 24.241, aprobada por el Congreso en su actual integración y que instituye el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte, ha sido ya promulgada por el Poder Ejecutivo.

En su capítulo V contiene "Delitos contra un fondo de jubilaciones y pensiones" y establece en todos los casos la inexcusabilidad al imponer prisión de 4 a 10 años, verbigracia.

"Artículo 138: ~~Se~~ reprimido con prisión de 4 a 10 años, el responsable de la calificación de entidades financieras, bancarias o de títulos valores y depósitos a

plazo fijo, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, efectuare una calificación incorrecta causando perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, incluidos los fondos transitorios y de fluctuaciones.

"Artículo 142: Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el obligado al cumplimiento de las prestaciones previsionales establecidas en esta ley que no efectivizara en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a las que se encuentre obligado, a quien resulte beneficiario de las mismas. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los cinco días de notificada la intimación res-

pectiva en su domicilio real o en el asiento de su negocio."

¿Es para la sociedad argentina que ingresa al primer mundo más importante preservar sus fondos de jubilaciones y pensiones o resguardar la identidad de una persona y la integridad de la familia?

¿Los debitos patrimoniales merecen mayor reproche que los que afectan derechos personalísimos? Evidentemente la respuesta es negativa.

Conclusivamente: por el ilícito, la peligrosidad de sus autores, las dificultades procesales y el espíritu de la medida cautelar en cuestión, se peticiona la no exearcelabilidad en los delitos de tráfico de mejores.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PARENTE

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre creación de la Defensoría del Pueblo en jurisdicción del Poder Legislativo.

Los proyectos de ley sobre institucionalización de la figura del defensor del pueblo fueron objeto de un detenido análisis por las comisiones de asesoramiento permanente de esta Honorable Cámara, competentes en la materia. Se sumaron las iniciativas parlamentarias de los señores diputados don Raúl Álvarez Echagüe (3.431-D-92), don Jorge R. Vanossi (3.660-D-92), don Jorge Gentile y Eduardo González (6.048-D-90), doña Matilde Fernández de Quarracino y don Alberto Aamouni (5.137-D-90), don L. F. Herrera (5.287-D-92), don Juan C. Maqueda (3.494-D-92), don Héctor Gatti y Gargiulo (5.723-D-92) y don Rodolfo M. Parente (3.717-D-92), entre otros, a la sanción del Honorable Senado, expediente en revisión 108-S-90 y posteriormente, 63-S-93 del mismo tenor.

En particular, la Comisión de Legislación General, competente en algunos de los expedientes, trabajó afanosamente en busca de un consenso que permitiese espejear los cuestionamientos que impedían la sanción del proyecto en revisión, alcanzando el diseño de un anteproyecto sobre el tema, que fue girado para su consideración por la Comisión de Asuntos Constitucionales. La propuesta ponía énfasis en la clara definición de las funciones del ombudsman, en especial, su atención a los comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, por encima del tratamiento de asuntos particulares. Asimismo, reforzaba el sistema de información y publicidad de las actuaciones del defensor del pueblo, recogiendo experiencias que aconsejaban dotarlos de tales recursos en aras de la eficiencia de su proceder —informes verbal y escrito— ante las Cámaras del Congreso.

Por su parte, la citada normativa aconsejaba la selección de la persona del defensor del pueblo en quien reuniera los requisitos para ser electo senador y acreditar "tener una reputación de integridad, capacidad e imparcialidad comprobable por cualquier medio",

limitando la designación de sus adjuntos a profesionales del derecho con versación en derecho público.

En cuanto al procedimiento de selección, optaba por el concurso público de antecedentes convocado por ambas Cámaras en sendas comisiones de 7 diputados y 7 senadores y, completaba el mismo con las normas contenidas en el proyecto en revisión.

El giro de los proyectos a comisiones diferentes y los avatares de los tiempos parlamentarios, llevaron al despacho del proyecto contenido en el expediente 63 del Honorable Senado, ingresado a esta Cámara en 1993, y con asiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia —especializadas— y Presupuesto y Hacienda, con estructura y sustancia similar al anteproyecto antes mencionado.

Así los hechos, apoyamos el despacho en tratamiento, con expresa referencia a los antecedentes expuestos y reservamos unas breves consideraciones sobre los motivos que inspiran el decreto 1.783/93 (B.O. 30-8-93) de creación de la institución del defensor del pueblo en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Nos preocupa, a partir de esta sanción y de la del decreto, la posible coexistencia de un futuro próximo de dos ombudsmen de orígenes distintos. Nos extraña su intento de conciliación con fundamento en los considerandos del decreto que señalan: que una eventual ley podría "asignarle un perfil diferente al que se adopta por este decreto y que, sin duda, consolidará ampliamente el prestigio de la institución".

Por un lado, se admite que la institución debe ser creada por ley pero, por el otro, se insiste en el decreto. Decreto que, casi íntegramente reproduce el texto de la sanción del Senado, con las adaptaciones que el caso exige, atento el ámbito de su creación.

Dejamos entonces planteado el posible conflicto e invitamos a nuestros pares a reflexionar sobre la necesaria contención de esta tendencia del Poder Ejecutivo al calmar su impaciencia con el recurso del decreto, invasor de competencias legislativas y fiel reflejo de una actitud gubernamental que no respeta o comprende los tiempos legislativos.